

## GOBIERNO PROVISIONAL.

### MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

#### DECRETO.

Usando de las facultades que me competen como individuo del Gobierno Provisional y Ministro de la Gobernacion,

Vengo en nombrar Oficial de la clase de terceros de este Ministerio á D. Fernando de Leon y Castillo, cuya plaza resulta vacante por salida á otro destino de D. Evaristo Escalera.

Madrid veintiseis de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve.

El Ministro de la Gobernacion,  
PRÁXEDES MATEO SAGASTA.

### MINISTERIO DE ULTRAMAR.

#### DECRETO.

Quando quiera que la libertad ha restaurado su imperio sobre nuestra Peninsula en pos de sus reiteradas conmociones políticas, siempre las fraternales miras y el desinteresado anhelo de sus promovedores, traspasando la barrera de los Océanos, se han extendido hasta aquellas regiones del suelo pátrio que allende de ellos yacen. Movido constantemente de sus generosos impulsos, muchas veces hasta en los momentos mismos de la suprema agitación y del más crítico peligro, el noble pueblo peninsular ha formulado resueltamente el propósito de que sus hermanos de aquellos apartados climas participen hasta donde más pueda ser del beneficio de sus conquistas en el terreno de las libertades más de una vez obtenidas á precio de su sangre.

Si tan leal intento había sido hasta ahora un fenómeno constante, no podía menos de significarse con más decision que nunca hoy, que el vapor y la electricidad han borrado casi las distancias, y cuando los principios proclamados por la revolucion de Setiembre orientan en fórmulas de tan democrático radicalismo que apenas si podían ser ántes soñadas como una utopía.

Distintas, sin embargo, aquellas regiones, y separadas de su madre comun la patria española, más aun que por la distancia material y la situacion geográfica, por esenciales y constitutivas diferencias en su modo de ser natural, social y económico, si no por todos bien apreciadas, de todos al menos conocidas, lo son y están mucho más todavía las unas de las otras, hasta el punto de que unos mismos principios y un idéntico propósito gubernativo no pueden tener en todas ellas, ni la misma forma concreta, ni el mismo grado de aplicacion y desenvolvimiento.

Tal ha sido la razon de origen de la especialidad de nuestra legislacion ultramarina, que no responde á tan ficticias causas que puedan ser fácilmente removidas por el progreso mismo de los tiempos, y que á cada revisor conato de repentinias y radicales transiciones ofrece en la historia una página dolorosa que no es seguramente la más justa reciprocidad del leal propósito que las dictara. Comprendese bien que las islas que adyacen á nuestras costas ó demoran á breve distancia de las mismas, asimiladas por la propia naturaleza á la matriz peninsular en todas sus condiciones andropológicas, sociales y morales, hayan sido desde tiempo inmemorial regidas por sus mismas leyes políticas y administrativas, y consideradas para todo como una continuacion no interrumpida del suelo de la patria, consortes con él en todos los accidentes y vicisitudes de su forma y régimen.

Si ya empero nos alejamos á meditar sobre aquellas otras que están situadas en el gran seno occidental del Atlántico, preciosos restos de lo que fué en un tiempo la gran España americana, aunque las semejanzas son todavía grandes, la semejanza es ya patente; y por más que nunca puedan dejar de considerarse como una parte integrante del territorio nacional, por más que deban y hayan de ser consultadas acerca de sus propios destinos, no se necesita un gran esfuerzo de buena voluntad ni gran altura de criterio práctico para comprender tambien que, cualquiera que sea la extension radical de los principios proclamados por la revolucion, estos no pueden ni deben plantearse allí desde luego en toda su latitud, sin las prudentes y bien graduadas modificaciones que exigen las condiciones diferenciales arriba mencionadas, y sin la exquisita prevision que impone ante todo su maternal situacion político-geográfica. Por liberal y revolucionariamente generosa que sea la proclamacion del tema radical que quiere que se salven los principios aunque perezcan las Colonias; por más liberal, por más prudente, y sobre todo por más patriótico tiene el Ministro que suscribe el propósito que abraza de salvar á la vez las Colonias y los principios.

Pero si tratándose de nuestras Antillas es tan justo como lógico esperar á que los detalles prácticos de sus necesidades políticas y administrativas sean formulados por su propia y directa representacion en el seno de la general de la Soberanía del país, á la cual exclusivamente toca definir en tan grave materia, al tratarse de nuestras provincias de Oceanía, cuya menor distancia de nosotros es casi la mayor posible del globo, de aquellos remotos y tranquilos archipiélagos adonde la voz de las contiendas civiles llega apenas como un eco debilitado, sin que nuestras más profundas convulsiones produzcan el más ligero estremecimiento, seguro es que ni con el más exagerado criterio revolucionario pueda creerse con

perfecta sinceridad, ni en la conveniencia de una representacion directamente designativa, condenada por los resultados de repetidas experiencias y recibida ya en autoridad de cosa juzgada, ni en el otorgamiento de franquicias políticas que son allí por su naturaleza exóticas.

Nadie deplora tanto como el que suscribe que nuestros hermanos de aquellas regiones no se hallen en estado de sentir este género de necesidades; pero cree tambien que en su situacion actual nada habría tan imprudente como impulsarlos, mal su grado, al ejercicio de derechos que no conocen y á la práctica de libertades que no aprecian.

Si por causas que no todas son obra de los hombres y de los Gobiernos, el pueblo indígena filipino se halla aún en el estado moral de una primitiva infancia, brindarle á libar la copa de todas las libertades sería exponerle seguramente á la embriaguez política que tanto trastorna y desorganiza á los pueblos que se saturan de ellas sin estar convenientemente preparados por medio de una instruccion sólida y de una larga, progresiva y consciente práctica de las altas virtudes cívicas que son el nervio de los pueblos libres.

Mas si por culpas que tampoco son exclusivamente suyas se ven privados por hoy de la posibilidad de concurrir á la participacion directa de nuestras libertades, no por eso se han de ver desheredados de los beneficios prácticos de sus consecuencias; y si por medio de radicales, útiles y bien entendidas reformas puede lograrse que la aspiracion política, manifestacion externa del conocimiento intuitivo del derecho, germine hoy para brotar mañana, más legítima gloria será la de haberla creado que no la de anticiparse á satisfacerla cuando aún no existe. Por fortuna en el extenso campo de las modificaciones administrativas que allí son indispensables hay abundantes laureles que recoger para la revolucion, bastantes á lograr que su obra, positivamente fecunda, sea en lo venidero recordada con sincera y perpetua gratitud.

La emancipacion y deslinde entre poderes que, si deben ser armónicos, necesitan estar concretamente definidos en sus distintas y respectivas atribuciones, buscando en su mútuo apoyo la unidad que no resulta de su confusion; la conveniencia de distribuir la accion gubernativa en aquellos archipiélagos de una manera que, descargando el voluminoso encéfalo de su capitalidad de las multiplicadas atribuciones administrativas que le abruma, reparta sin debilitarle el enérgico influjo de las Autoridades hasta los extremos en donde hoy es todavía imperceptible, creando por lo menos la entidad provincial con carácter propio y permanente: la secularizacion de los elementos civilizadores, sin chocar imprudentemente con libres y venerables instituciones, que ajenas allí de todo interés político sólo se han inspirado en el de la patria; las alteraciones que exigen el sistema de rentas, de impuestos, de colonizacion; en una palabra, todas las grandes reformas que reclama el estado social, administrativo y económico de aquellas regiones, tienen ya reconocida y oficialmente comprobada su necesidad, y cuentan con luminosos estudios y preciosos trabajos practicados en distintas épocas, ya por los centros superiores de aquella Administracion, ya por los directivos de este Ministerio, ó por personas de reconocida ilustracion y capacidad.

Fáltales sólo un inteligente impulso que los dé sintética cohesion y forma adecuada á sus tiempos y necesidades presentes, que sus autores no pudieron en manera alguna prever, por más que depurados aquellos de toda pasion política por la remota distancia del sujeto abundan todos en una feliz analogía de criterio.

Pero esta indispensable unidad no puede ser obra exclusiva de los funcionarios activos de este Ministerio, no sólo porque la natural subdivision del trabajo y del estudio en estos centros dificulta la clara percepcion de la armonía del conjunto, sino porque es preciso buscar en otros en que radican ramos de la gobernacion de aquellas provincias que á este no pertenecen especialidades que concurrán á ilustrar las cuestiones de su contacto con los que de aquí penden, y á poner término en sus recíprocas relaciones á la confusion en que hoy se hallan, y que es una de las más fuertes rémoras de su progreso.

Solamente la Marina, por ejemplo, puede conocer á fondo las necesidades de su especial incumbencia que deben sentirse en aquellos países, cuya poblacion y riqueza aglomeradas en extensísimas costas ven su porvenir indisolublemente enlazado al desarrollo de este orden de nuestro poder.

De aquí que se haya juzgado necesaria la creacion de una Junta especial de reformas que, teniendo por base los funcionarios directivos de este Ministerio y algunos otros designados por los de Guerra y Marina, lleve además á su seno los conocimientos prácticos de otras personas que, habiendo desempeñado cargos en la alta Administracion de aquellas islas, hayan acreditado en ellos su celo y su inteligencia; á fin de que, agrupando aquellos dispersos estudios y trabajos, rectificando en unos casos, completando en otros, y armonizando y dando cuerpo de unidad en todos á sus productos, se formulen en el más breve plazo posible los proyectos de ley que, con el objeto de mejorar ilustrada y progresivamente el estado actual de aquellas provincias, han de

ser sometidos á la deliberacion de las Cortes Constituyentes.

Por todas estas consideraciones, y en uso de las facultades que me competen como individuo del Gobierno Provisional y Ministro de Ultramar,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se crea en el Ministerio de Ultramar una Junta especial de reformas de Administracion y Gobierno de las Islas Filipinas para que, examinando los proyectos existentes, corrigiéndolos, adicionándolos y proponiendo á su vez los que estime convenientes, dé á todos ellos la indispensable unidad y correlacion.

Art. 2.º Dicha Junta estará presidida por el Excmo. Sr. D. Patricio de la Escosura, ex-Ministro y Comisario régio que fué para el estudio de las necesidades de aquellas islas en los años de 1861 á 1864, y serán individuos natos de ella el Subsecretario y los Jefes de las Secciones respectivas de este Ministerio.

Art. 3.º Formarán parte de la misma en concepto de miembros especiales:

D. Joaquin Montenegro y Guitart, Coronel de Ingenieros.

D. Eugenio Aguera, Capitan de navío, Jefe de la Seccion de Armaamentos del Ministerio de Marina.

D. Gabriel Alvarez, Intendente que ha sido de aquellas islas, y electo nuevamente para el mismo cargo.

D. Luis Estrada, Contador mayor decano del suprimido Tribunal de Cuentas de las mismas.

D. Federico Hoppe, Ministro del Tribunal de Cuentas del Reino, Ordenador general de Pagos y Director general de Hacienda que ha sido en este Ministerio.

D. Diego Suarez, Jefe de Administracion que ha sido en aquellas Islas; y

D. Vicente Branttes, Secretario que ha sido de aquel Gobierno superior civil y Consejero electo de aquella Administracion. Este último tendrá el carácter de Ponente de la Junta, y ejecutará sus acuerdos y resoluciones interiores.

Art. 4.º Tanto por la Subsecretaría como por las demás Secciones de este Ministerio se facilitarán á la Junta los antecedentes, documentos, datos y auxilios que pueda necesitar, quedando igualmente autorizada para dirigirse por medio de su Presidente á las corporaciones ó individuos residentes en la Peninsula que crea que pueden ilustrarla en sus importantes trabajos.

Madrid treinta de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve.

El Ministro de Ultramar,  
ADELARDO LOPEZ DE AYALA.

### EXPOSICIONES AL GOBIERNO PROVISIONAL.

Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion: El Ayuntamiento y mayores contribuyentes de esta villa de Mestanza, en la provincia de Ciudad-Real, han sabido con profundo dolor el atroz crimen de asesinato cometido en la persona del Sr. Gobernador civil de Burgos.

Tamaño atentado merece un pronto y ejemplar castigo, y no pueden menos los exponentes de manifestarlo á V. E., ofreciendo al Gobierno Provisional su más decidido apoyo para el sostenimiento del orden público.

Casas Consistoriales de Mestanza á 29 de Enero de 1869.—El Alcalde primero, Juan Herraez.—El Alcalde segundo, Carlos Ruiz.—Regidores: Julian Serrano.—Alfonso Molina.—Julian Bastante.—Manuel Pareja.—Francisco Herraez.—Antonio Vozmediano.—Francisco Herraez.—Felipe de Céspedes.—Leon Pareja.—Contribuyentes: Miguel García Lozano.—Norberto Urrutia.—Pedro Ruiz.—Manuel Toledano.—Manuel Eusebio Cieza.—Ignacio Gonzalez.—Juan M. Ramirez.

### SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

#### SENTENCIAS.

A todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed que el Gobierno Provisional de la nacion ha decretado lo siguiente:

«En el pleito que en el Consejo de Estado pende en grado de apelacion entre partes, de la una el Licenciado D. Saturnino Alvarez Bugallal, en representacion de Doña María de la Consolacion del Viso y Pareja, curadora ejemplar de su hermano D. Vicente, apelante; y de la otra el Fiscal, adhiriéndose tambien á la apelacion en nombre de la Administracion, apelada y coadyuvada por la empresa del ferrocarril de Córdoba á Málaga, representada por el Dr. D. Onésimo Alvarez Sobrino, sobre abono del valor de la piedra extraída de las fincas propias de D. Vicente para las obras del citado ferrocarril:

Visto: Vistos los antecedentes, de los cuales resulta: Que establecido en 1855 expediente gubernativo sobre el abono del valor de la piedra de un cortijo de la propiedad del incapacitado defendido en estos autos, empleada en la construccion del ferrocarril de Córdoba á Málaga, lo resolvió el Gobernador de la provincia en 18 de Diciembre de 1866 denegando la solicitud del curador del incapacitado.

Que notificada el siguiente día esta resolucion al que había promovido el expediente, contestó el mismo en la propia fecha que había cesado ya en su representacion legal, la que había pasado á la hermana del incapacitado Doña Consolacion; y hecha á esta la notificacion el citado día 19, dirigió la misma el 22 inmediato una exposicion al Gobernador apelando de su decreto para ante la Superioridad.

Que el Gobernador decretó el 27 inmediato que pasara la instancia al Consejo provincial; y esta corporacion informó el día 11 de Febrero de 1867 que por tratarse del rescaramiento de los daños y perjuicios causados por la construccion de una obra pública procedía que la cuestion se ventilase contentiosamente ante el mismo Consejo, al cual podrían recurrir los interesados en tiempo y forma; y el Gobernador lo decretó así en la misma fecha, y el 21 de Marzo siguiente lo trasladó al Subgobernador de Antequera para que lo hiciese saber á la Doña Consolacion, lo cual no verificó esta Autoridad hasta 29 de Abril siguiente:

Vista la demanda que en su consecuencia presentó ante el Consejo provincial de Málaga en 24 de Mayo siguiente D. Rafael Aguirre y Viso, como apoderado de Doña María de la Consolacion del Viso y Pareja curadora ejemplar de su hermano D. Vicente, contra el decreto del Gobernador de 18 de Diciembre de 1866, la cual fué autorizada por este despues de haber hecho constar la parte demandante el último hecho de la notificacion de la providencia gubernativa desestimando la apelacion para ante la Superioridad; Visto el auto dictado sin más trámites por el Consejo provincial en 27 de Junio de 1867 declarando que aquella apelacion interpuesta, como improcedente, no podía desvirtuar el transcurso del término de los 30 días marcados para deducir la demanda; y que debiendo por lo mismo contarse este plazo desde el día 19 de Diciembre de 1866 en que se le había hecho saber á la curadora recurrente el decreto reclamado, era inadmisibile por tardía la demanda que contra el decreto se había presentado en 24 de Mayo de 1867:

Vistos el escrito de la representacion de Doña María de la Consolacion del Viso pidiendo la reposicion é interponiendo subsidiariamente la apelacion del auto denegatorio de 27 de Junio de 1867, y el auto del propio Consejo provincial en que fué desestimada la reposicion solicitada y admitido el recurso de apelacion:

Visto el escrito presentado en el Consejo de Estado por el Licenciado D. Isidro Autran, á quien ha reemplazado despues el de la misma clase D. Saturnino Alvarez Bugallal, mejorando, á nombre de Doña María de la Consolacion del Viso y Pareja en el concepto anteriormente expresado, la apelacion interpuesta con la pretension de que se revoque el auto apelado y se mande que la demanda por el mismo denegada sea admitida y sustanciada con arreglo á derecho:

Vista la contestacion del Fiscal adhiriéndose á la apelacion de la parte reclamante, pidiendo que se consulte la nulidad de todo lo actuado ante el Consejo provincial de Málaga, á la confirmacion en otro caso del auto apelado de 27 de Junio de 1867, por el que se rechazó como tardía la demanda de la parte agravada:

Visto el escrito del Dr. D. Onésimo Alvarez y Sobrino, á nombre de la empresa del ferrocarril de Córdoba á Málaga, solicitando en concepto de coadyuvante de la Administracion que se confirme en todas sus partes el auto apelado, absolviendo á la empresa de la demanda entablada por Doña María de la Consolacion del Viso, y condenando á esta en todas las costas y gastos del juicio:

Visto el art. 8.º, párrafo cuarto de la ley de 2 de Abril de 1845:

Visto el art. 83, párrafo sexto de la ley de 25 de Setiembre de 1863:

Visto el párrafo segundo del art. 17, y el 27 del real decreto de 27 de Julio de 1863:

Considerando que la cuestion de nulidad por incompetencia puede promoverse en cualquiera estado del pleito:

Considerando que la demanda tiene por objeto el abono del valor de la piedra extraída del cortijo de Don Rodrigo para las obras del ferrocarril de Córdoba á Málaga:

Considerando que si bien los Consejos provinciales deben conocer de las cuestiones contentiosas sobre rescaramiento de perjuicios ocasionados por las obras públicas, está reservado á la Administracion central y al Consejo de Estado en primera y única instancia la facultad de conocer de las cuestiones relativas á la ocupacion de terrenos y aprovechamientos de materiales:

El Gobierno Provisional, conformándose con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado en sesion á que asistieron D. Antonio Rentero y Villa, Presidente accidental; D. Antero de Echarrri, D. Domingo Moreno, D. Tomás Retortillo, D. José García Barzanallana, D. Evaristo de Castro y Rojo, D. Rafael de Liminiana y Brignole, D. Antonio Rentero y Villa, D. Joaquin Gutiérrez de Rubalcava y D. Antonio María Blanco y Castañola,

Ha tenido á bien declarar nulo todo lo actuado ante el Consejo provincial de Málaga, sin perjuicio de que los interesados usen donde corresponda de los recursos que las leyes les conceden.

Madrid once de Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho.—El Presidente del Gobierno Provisional y del Consejo de Ministros, Francisco Serrano.

Publicacion.—Leído y publicado el anterior decreto por el Sr. Presidente accidental de la Sala tercera del Tribunal Supremo de Justicia en audiencia pública de este día, acordó la misma Sala que se tenga como resolucion final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos, se notifique en forma á las partes y se inserte en la Gaceta, de que certifico.

Madrid 17 de Diciembre de 1868.—El Secretario Relator, Licenciado, Juan de Vega Ballesteros.

A todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed que el Gobierno Provisional de la nacion ha decretado lo siguiente:

«En el pleito que en primera y única instancia pende en el Consejo de Estado entre partes, de la una el Dr. D. Alfredo Massa y Navarro, en nombre de D. Juan Rovira y Pascual del Povil, como padre y legítimo representante de su hijo menor D. Joaquin, presunto sucesor en la Baronia de la Usola, demandante; y de la otra el Fiscal en representacion de la Administracion, demandada, sobre revocacion de la real orden de 18 de Junio de 1867, por la cual se declaró que los sucesores en la Baronia de la Usola han de pagar para usar este título el impuesto especial correspondiente:

Visto: Vistos los antecedentes, de los cuales resulta que D. Juan Rovira y Pascual del Povil, viudo de la Baronesa de la Usola, que falleció en el año de 1835, y padre de D. Joaquin, sucesor en la Baronia, fundado en que el antecesor en dicho título D. Vicente Merita, usando del derecho que le concedía la ley 24, título 4.º, libro 6.º de la Novísima Recopilacion había redimido perpetuamente en el año de 1800 el derecho de media anata correspondiente á aquel título mediante el pago de 225,000 mrs. de vellón, acudió al Ministerio de Hacienda solicitando que se le relevase del pago del impuesto especial causado en esta sucesion y en las demás que pudieran ocurrir, y en su virtud:

Visto el real decreto de 28 de Diciembre de 1846 é instruccion de 14 de Febrero de 1847 estableciendo el impuesto especial sobre grandezas y títulos en sustitucion del servicio de lanzas y medias anatas, y teniendo en consideracion que por real orden de 28 de Setiembre de 1849 se dispuso que los títulos que gozaban de exencion del pago del referido servicio no estaban relevados del nuevo impuesto; que por otra de 17 de Octubre de 1851 se hizo extensiva esta obligacion á los que los tenían redimidos, disposicion que se confirmó por real decreto-sentencia de 11 de Mayo de 1853, expedido á consecuencia del pleito sostenido por la Marquesa de la Lapilla con la Hacienda ante el suprimido Consejo real, de conformidad con lo propuesto por la Direccion general de Contribuciones, se dictó la real orden de 18 de Junio de 1867, por la cual se desestimó la re-

ferida instancia y declaró que los sucesores en la Baronia de la Usola debían pagar el impuesto especial correspondiente si habían de usar legítimamente del título:

Vista la demanda presentada en el Consejo de Estado por el Dr. D. Alfredo Massa y Navarro, y mejorada despues á nombre de D. Juan Rovira y Pascual del Povil, como padre y legítimo representante de su hijo menor D. Joaquin, presunto sucesor en la Baronia de Usola, con la pretension de que se revoque la precitada real orden de 18 de Junio de 1867 y reproduciendo la peticion deducida en la via gubernativa:

Vistos los testimonios que acompañan á la demanda:

Visto el escrito de contestacion del Fiscal en el mencionado Consejo de Estado pidiendo que se abuelva á la Administracion de la demanda y se confirme la real orden por la misma impugnada:

Vista la ley 24, tit. 1.º, lib. 6.º de la Novísima Recopilacion:

Visto el real decreto de 28 de Diciembre de 1846, por el cual se suprimió el impuesto de lanzas y el derecho de media anata, y se estableció otro en su lugar con la denominacion de impuesto especial sobre grandezas y títulos:

Visto el art. 2.º de la instruccion de 14 de Febrero de 1847 para llevar á efecto el real decreto citado, en que se establece que abolido el derecho de media anata, y no haciéndose exencion alguna del nuevo impuesto especial en el referido decreto, se entiende que caducan con los actuales poseedores las gracias de relevacion de pago de media anata que algunos disfrutaban:

Vista la real orden de 18 de Setiembre de 1849, por la cual se declaró que los Grandes de España y títulos de Castilla que al expedirse el real decreto ántes citado gozaban la exencion del pago de media anata y lanzas no están relevados por eso de satisfacer el nuevo impuesto especial que por aquel se creó en las sucesiones ocurridas con posterioridad á su publicacion:

Considerando que suprimidos por el real decreto citado los derechos de lanzas y medias anatas, caducaron necesariamente las exenciones de pago de estos servicios de cualquiera clase que ellas fueren, como lo declararon la instruccion y real orden indicadas:

Y considerando que con arreglo al propio real decreto no puede admitirse otra relevacion de pago del impuesto especial que las únicas que dicha disposicion establece, entre las que no está comprendida la de que se trata:

El Gobierno Provisional, conformándose con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado en sesion á que asistieron D. Antonio Escudero, Presidente; D. Antero de Echarrri, D. Pablo Jimenez de Palacio, D. Domingo Moreno, D. Tomás Retortillo, D. José García Barzanallana, D. Evaristo de Castro y Rojo, D. Rafael de Liminiana y Brignole, D. Antonio Rentero y Villa, D. Joaquin Gutiérrez de Rubalcava y D. Agustin Perales,

Ha tenido á bien resolver de la demanda á la Administracion y confirmar la real orden impugnada.

Madrid diez de Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho.—El Presidente del Gobierno Provisional y del Consejo de Ministros, Francisco Serrano.

Publicacion.—Leído y publicado el anterior decreto por el Presidente accidental de la Sala tercera del Tribunal Supremo de Justicia en audiencia pública de este día, acordó la misma Sala que se tenga como resolucion final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos, se notifique en forma á las partes y se inserte en la Gaceta, de que certifico.

Madrid 17 de Diciembre de 1868.—El Secretario Relator, Licenciado Juan de Vega Ballesteros.

A todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed que el Gobierno Provisional de la nacion ha decretado lo siguiente:

«En el pleito que en grado de apelacion pende ante el Consejo de Estado entre partes, de la una D. Miguel Nieves, Juan Rodriguez, Rafael Miguel, Jerónimo Pordanungo, José Hernandez, Cirilo Lozano, Florencia y Antonio García, vecinos de Mayalde, provincia de Zamora, apelantes en rebeldía; y de la otra la Administracion general, apelada y representada por el Fiscal, sobre imposicion de ciertas multas y abono de daños y perjuicios causados por el ganado cabrio de los mencionados sujetos en el monte comun del expresado pueblo:

Visto: Visto el expediente gubernativo, del que resulta que habiendo instruido diligencias el Guarda mayor de montes en averiguacion de los autores del daño originado en el monte del pueblo de Mayalde, el Gobernador de la provincia impuso á Nieves y socios determinadas multas y la indemnizacion de daños y perjuicios que habían causado sus ganados:

Vista la demanda que los interesados propusieron ante el Consejo provincial de Zamora contra la expresada resolucion; el auto de 8 de Enero último en que se desestimó, por no haberla presentado en tiempo, la apelacion que interpusieron en 22 del mismo mes; y el auto en que fué admitida:

Vistos el escrito del Fiscal acusando la rebeldía á los apelantes en 4 de Mayo del citado año 1868, y la providencia de la Seccion de lo Contencioso en que la hubo por acusada:

Visto el art. 252 del reglamento de 30 de Diciembre de 1846, en que se concede el plazo de dos meses para mejorar la apelacion, contados desde el trascurso de los 10 días otorgados para interponerla: Visto el 254, en que se previene que si el apelante no mejorase la apelacion y consentida la sentencia á la primera rebeldía que le acuse el apelado:

Considerando que D. Miguel Nieves y consortes han dejado pasar con exceso el término prescrito para mejorar la apelacion, dando lugar á que el Fiscal les acusase la rebeldía;

El Gobierno Provisional, conformándose con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado en sesion á que asistieron D. Antonio Escudero, Presidente; D. Antero de Echarrri, D. Conde de Velarde, D. Lorenzo Nicolás Quintana, Don Domingo Moreno, D. Tomás Retortillo, el Marqués de Alhama, D. Juan Antoine y Zayas y D. Rafael de Liminiana y Brignole,

Ha tenido á bien declarar desierta la apelacion interpuesta, y consentido el auto dictado por el Consejo provincial de Zamora en 8 de Enero de 1868.

Madrid diez de Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho.—El Presidente del Gobierno Provisional y del Consejo de Ministros, Francisco Serrano.

Publicacion.—Leído y publicado el anterior decreto por el Sr. Presidente accidental de la Sala tercera del Tribunal Supremo de Justicia en audiencia pública de este día, acordó la misma Sala que se tenga como resolucion final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos, se notifique en forma á las partes y se inserte en la Gaceta, de que certifico.

Madrid 17 de Diciembre de 1868.—El Secretario Relator, Licenciado Juan de Vega Ballesteros.





